

## NÚMERO 41

### 41.<sup>A</sup> REUNIÓN - 17. SESIÓN ORDINARIA - SEPTIEMBRE 30 DE 1924

Presidencia del señor **ELPIDIO GONZALEZ**

**Senadores presentes:** Antille Armando G., Aybar Augier Alberto, Bravo Mario, Caballero Ricardo, Cantoni Aldo, Céspedes Jorge, del Valle Delfor, Gallo Segundo B., Garro Pedro A., Gómez Ramón, Justo Juan B., Larlús Pedro, Linares Luis, Luna David, Melo Leopoldo, Mora Olmedo Epifanio, Patrón Costas Robustiano, Rodríguez Saá Adolfo, Sánchez de Bustamante Teófilo, Sagnier Fernando, Soria Fernando M., Torino Martín M., Vidal Juan R., Zabala Carlos.

**Senadores ausentes, con aviso:** Llanos Pedro, Soto Pedro Numa.

**Senadores ausentes, con licencia:** Núñez Rafael, Paz Posse Ramón.

#### SUMARIO

- 1.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, reformando la ley número 8.999.
- 2.—Proyecto de resolución, del señor senador doctor Antille, sobre designación de una Comisión Especial encargada de estudiar y redactar, un proyecto de Ley Orgánica de los Tribunales y del Código de Procedimientos en materia Civil y Criminal de la Capital Federal.
- 3.—Despacho de la Comisión de Negocios Constitucionales, en el proyecto de ley, en revisión, acordando venias para demandar a la Nación. A moción del señor senador doctor Cantoni, se resuelve considerar este despacho como primer asunto, después de las preferencias ya acordadas.
- 4.—Moción, del señor senador doctor Melo, para que se trate como primer asunto, el proyecto de ley, en revisión, acordando permiso al excelentísimo señor Presidente de la Nación, para ausentarse de la Capital durante el receso del Congreso.
- 5.—Se vota y aprueba la moción formulada por el señor senador doctor Cantoni, registrada en el número 3 del sumario.
- 6.—Se vota y aprueba la moción del señor senador doctor Melo, a que se refiere el número 4 de este sumario.
- 7.—Consideración del despacho de la Comisión de Negocios Constitucionales, en el proyecto de ley, en revisión, acordando permiso al excelentísimo señor Presidente de la Nación, para ausentarse de la Capital, durante el receso del honorable Congreso. Se aprueba.
- 8.—Moción, del señor senador doctor Antille, para que se trate sobre tablas el proyecto de resolución, de que es autor y al que se refiere el número 2 del sumario. Se aprueba, así como el proyecto de referencia.
- 9.—Pedido de informes del señor senador doctor Aybar Augier, a la Comisión de Negocios Constitucionales, en el asunto referente al Arzobispado de Buenos Aires.
- 10.—Moción, del señor senador doctor Zabala, para que continúe formando parte de la Comisión de Negocios Constitucionales, el señor senador doctor Mora Olmedo. Se aprueba.
- 11.—Mensaje del Poder Ejecutivo, solicitando la devolución del de fecha 1º de septiembre, en el que pedía acuerdo para designar al doctor V. J. Berlinger, Juez Federal de Bahía Blanca.
- 12.—Moción del señor senador doctor Bravo, para que pase a la Comisión de Acuerdos, el mensaje del Poder Ejecutivo, a que se refiere el número anterior del sumario. Se aprueba.
- 13.—Despacho de la Comisión de Peticiones y Poderes, acordando un subsidio al Colegio Nacional «Juan Martín de Pueyrredón».
- 14.—Moción del señor senador doctor Sánchez de Bustamante, para que se trate sobre tablas el despacho de la Comisión de Peticiones y Poderes, consignado en el número anterior del sumario. Se rechaza.
- 15.—Consideración del despacho de la Comisión de Legislación, en el proyecto de ley, en revisión, sobre trabajo de las mujeres y menores. Se aprueba.

ciada así, en estos términos, es suficiente para que el honorable Senado no le dé curso.

**Sr. Presidente.** — Se va a votar la moción del señor senador por Jujuy.

—Se vota y resulta negativa.

**Sr. Secretario (Labougle).** — Orden del día número 8 bis.

**Sr. Antille.** — ¿Podría informarme la secretaría si se ha despachado un proyecto referente a la erección de un monumento a los Constituyentes del 53?

**Sr. Secretario (Labougle).** — Está en la orden del día impresa, número 14.

## 15

### PROYECTO DE LEY SOBRE TRABAJO DE LAS MUJERES Y MENORES

**Sr. Presidente.** — Corresponde considerar la segunda parte de la orden del día 8 bis.

—Se lee:

*Honorable Senado:*

La Comisión de Legislación ha tomado en consideración el proyecto de ley, venido en revisión, sobre trabajo de las mujeres y menores, y os aconseja su sanción, con las siguientes modificaciones:

«Artículo 1º — Queda prohibido en la Capital de la República, en los lugares sometidos a la jurisdicción exclusiva del gobierno de la Nación y en los Territorios nacionales, ocupar a menores de doce años de edad, en trabajo por cuenta ajena. Tampoco puede ocuparse a mayores de esta edad que, comprendidos en la edad escolar, no hayan completado su instrucción obligatoria. Sin embargo, el ministerio de menores respectivo podrá autorizar el trabajo de éstos, cuando lo considere indispensable para la subsistencia de los mismos, o de sus padres o hermanos, siempre que se llene en forma satisfactoria el mínimo de instrucción escolar exigida por la ley.

«No están comprendidos en estas prohibiciones los trabajos rurales en los Territorios nacionales, siempre que los menores hubiesen recibido el mínimo de instrucción primaria obligatoria o en las épocas de vacaciones.

«Artículo 18. — Substituir en el segundo apartado, al final, las palabras «bajo pena de daños y perjuicios» por «bajo pena de multa de 20 a 200 pesos, que se entregarán al damnificado».

«Artículo 19. — Suprimir «y en las provincias».

«Artículo 21. — Cambiar el apartado final por el siguiente: «En los casos previstos por el último apartado

del artículo 13 y por el artículo 14, el producto de la multa será entregado inmediatamente de hecha efectiva a la mujer perjudicada». Agregar el siguiente apartado: «Fuera de los casos previstos en el apartado anterior y en el último del artículo 18, el producto de las multas ingresará al Consejo Nacional de Educación».

«Artículo 24. — Suprimido».

Sala de la Comisión, septiembre 3 de 1924.

*Pedro Llanos. — Fernando Saguier.*

En disidencia con las modificaciones introducidas en el artículo 1º y sus concordantes 19 y 24; y agregar al artículo 21, último apartado propuesto por la Comisión, las palabras: «o de las provincias, según corresponda».

*Mario Bravo.*

## CAPITULO I

### Trabajo de los niños

Artículo 1º — Queda prohibido en todo el territorio de la república, ocupar a menores de 12 años de edad en cualquier clase de trabajo por cuenta ajena, incluso los trabajos rurales.

Tampoco puede ocuparse a mayores de esta edad que, comprendidos en la edad escolar, no hayan completado su instrucción obligatoria. Sin embargo, el ministerio de menores respectivo, podrá autorizar el trabajo de éstos, cuando lo considere indispensable para la subsistencia de los mismos, o de sus padres o hermanos, siempre que se llene en forma satisfactoria el mínimo de instrucción escolar exigida por la ley.

Art. 2º — Ningún menor de 14 años, podrá ser ocupado en caso alguno en el servicio doméstico ni en explotaciones o empresas industriales o comerciales, sean privadas o públicas, de lucro o de beneficencia, a excepción de aquellas en que sólo trabajan los miembros de la misma familia.

Art. 3º — La prohibición de los artículos anteriores no se refiere al trabajo de los niños con propósitos educativos, en escuelas reconocidas al efecto por la autoridad escolar competente.

Art. 4º — Ningún varón menor de 14 años, ni mujer soltera menor de 18 años podrá ejercer, por cuenta propia o ajena, profesión alguna que se ejerza en calles, plazas o sitios públicos.

## CAPITULO II

### Ocupación de mujeres y de menores de 18 años

Art. 5º — No podrá ocuparse en la industria y comercio a mujeres mayores de 18 años durante más de 8 horas diarias o 48 horas por semana, ni a menores

de 18 años durante más de 6 horas diarias o 36 horas por semana.

Art. 6º — No se podrá ocupar a mujeres, ni a menores de 18 años en trabajo nocturno, entendiéndose por tal, el comprendido entre la hora 20 hasta la 7 del día siguiente en invierno y la 6 en verano, salvo en los servicios de enfermeras y doméstico.

La disposición anterior no se aplicará a las empresas de espectáculos públicos nocturnos, en los que podrán trabajar mujeres mayores de 18 años.

Art. 7º — Las mujeres y los menores de 18 años que trabajan en horas de la mañana y de la tarde, dispondrán de un descanso de dos horas al mediodía.

Art. 8º — Queda prohibido encargar la ejecución a domicilio de algún trabajo a mujeres y a menores de 18 años ocupados en algún local u otra dependencia de la empresa.

Art. 9º — Queda prohibido ocupar a mujeres y a menores de 18 años en industrias o tareas peligrosas o insalubres.

La reglamentación determinará las industrias que esta prohibición comprende en general.

Art. 10. — La prohibición del artículo anterior se refiere particularmente a las siguientes:

- a) La destilación de alcohol y la fabricación o mezcla de licores;
- b) La fabricación de albayalde, minio y cualesquiera otras materias colorantes tóxicas, así como la manipulación de pinturas, esmaltes o barnices que contengan sales de plomo o arsénico;
- c) La fabricación, manipulación o elaboración de explosivos, materias inflamables o cáusticas, o el trabajo en locales o sitios en que se fabriquen, elaboren o manipulen o estén depositados explosivos, materias inflamables o cáusticas en cantidades que signifiquen peligro de accidente;
- d) La talla y pulimento de vidrio, el pulimento de metales con esmeril y el trabajo en cualquier local o sitio en que ocurra habitualmente desprendimientos de polvos o de vapores irritantes o tóxicos.

Art. 11. — Queda prohibido ocupar a mujeres y a menores de 18 años:

- a) En carga y descarga de navíos;
- b) En canteras o trabajos subterráneos;
- c) En la carga o descarga por medio de grúas o cabrias;
- d) Como maquinistas o foguistas;
- e) En el engrasado y limpieza de maquinaria en movimiento;
- f) En el manejo de correas;
- g) En sierras circulares y otros mecanismos peligrosos;
- h) En la fundición de metales y en la fusión y en el sopleo bucal de vidrio;

- i) En el transporte de materias incandescentes;
- j) En el expendio de bebidas alcohólicas destiladas o fermentadas y en cualquier local o dependencia que se expendan.

Art. 12. — En caso de accidente del trabajo o de enfermedad de una mujer o menor, si se comprueba ser su causa alguna tarea de las prohibidas a su respecto por la presente ley o efectuada en condiciones que signifiquen infracción de sus requisitos, o el encontrarse la mujer o el menor en un sitio de trabajo en el cual es ilícita su presencia, se considerará por ese solo hecho el accidente o la enfermedad como resultante de culpa del patrón.

### CAPITULO III

#### *Protección de la maternidad*

Art. 13. — Queda prohibido en los establecimientos industriales o comerciales y sus dependencias, sean urbanos o rurales, públicos o particulares, excepto aquellos en que sólo trabajen miembros de la familia del patrón, ocupar a mujeres durante el período de seis semanas posteriores al parto.

Las mismas deberán abandonar el trabajo previa presentación de un certificado médico en el que conste que el parto se producirá probablemente en un plazo de seis semanas.

No podrá despedirse a ninguna mujer con motivo de embarazo y deberá conservarse el puesto a la que permanezca ausente de su trabajo en virtud de las disposiciones anteriores.

Art. 14. — En caso de que una mujer permanezca ausente de su trabajo durante un tiempo mayor, a consecuencia de enfermedad que según certificado médico deba su origen al embarazo o al parto y la incapacite para reanudarlo, no se podrá declararla cesante con ese motivo.

Art. 15. — Toda madre de lactante podrá disponer de un intervalo de 15 minutos cada tres horas, para amamantar a su hijo, salvo el caso en que un certificado médico establezca un intervalo menor.

En los establecimientos que ocupen el número mínimo de mujeres que determine la reglamentación, deberán habilitarse salas maternas adecuadas para los niños menores de dos años, donde éstos quedarán en custodia durante el tiempo de ocupación de las madres.

### CAPITULO IV

#### *Disposiciones de aplicación*

Art. 16. — En los establecimientos industriales y comerciales que ocupen a menores de 18 años, deberán archivarlos clasificados sus certificados de edad, del registro civil o documentos equivalentes, llevándose además un registro general de dichos menores, con los datos que prescriba la reglamentación.

Art. 17. — Las oficinas del registro civil deberán proveer gratuitamente de una libreta a todos los menores a que se refiere esta ley, en la que constará su nombre y apellido, edad, ocupación y horario de trabajo, así como el nombre y apellido, profesión y domicilio de sus padres, tutores o encargados.

En esta misma libreta se hará constar por la autoridad correspondiente si el menor ha cumplido la obligación escolar.

Art. 18. — Todo el que ocupe a menores de 18 años, está obligado a anotar en la libreta a que se refiere el artículo anterior, las condiciones del trabajo a que los destina y el sueldo o salario.

Una planilla con estos datos deberá ser enviada a la autoridad de aplicación. Queda prohibida toda otra anotación, y especialmente cualquiera que fuese perjudicial al portador, por signos o palabras, bajo pena de daños y perjuicios.

Art. 19. — Son autoridades de aplicación de la presente ley, en la Capital Federal, el Departamento Nacional del Trabajo, y en las provincias y en los territorios nacionales, las autoridades que determine la respectiva reglamentación.

La policía cooperará con dichas autoridades en la verificación de las infracciones.

Art. 20. — Los representantes de la autoridad de aplicación tienen facultad para penetrar en todos los establecimientos a que se refiere esta ley, durante las horas de trabajo.

Fuera de estas horas se requerirá orden judicial de allanamiento.

## CAPITULO V

### *Disposiciones penales*

Art. 21. — Las infracciones a la presente ley serán penadas con multa de 50 pesos a 1.000 moneda nacional, que se doblará en caso de reincidencia o en su defecto, prisión equivalente, de acuerdo con el Código Penal.

Se contarán tantas infracciones como personas ocupadas ilegalmente o mujeres privadas de su ocupación en infracción de lo dispuesto en los artículos 13 y 14 de esta ley.

En este último caso, el producto de la multa será entregado inmediatamente a la mujer perjudicada.

Art. 22. — Será reprimido con multa de un mil a cinco mil pesos moneda nacional, o en su defecto, prisión equivalente de acuerdo con el Código Penal, todo el que haga ejecutar con mujeres o menores de 18 años ejercicios peligrosos de fuerza o de dislocación.

Sufrirá igual pena el que haga trabajar en espectáculos públicos nocturnos a un menor de 16 años, así como los padres o tutores que lucen con su trabajo.

En caso de reincidencia en alguna de estas infraccio-

nes, se aplicará la pena pecuniaria máxima o prisión de seis meses a dos años.

Art. 23. — Sin perjuicio de las facultades de la autoridad de aplicación y del ministerio de menores, tienen personería para denunciar y acusar criminalmente a los infractores, además de las personas damnificadas, las entidades de protección a las mujeres y menores y las asociaciones obreras, por medio de sus comisiones directivas.

Art. 24. — Quedan incorporadas las disposiciones de la presente ley a los Códigos Civil y Penal de la Nación.

Art. 25. — Derógase la ley número 5.291.

Art. 26. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dado en la Cámara de Diputados, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de julio de mil novecientos veintidós.

RICARDO PEREYRA ROZAS

*Carlos González Bonorino*

**Sr. Presidente.** — Está en discusión en general.

**Sr. Bravo.** — Pido la palabra.

La Comisión de Legislación había resuelto que su presidente, el señor senador Saguier, informara el despacho, que en este momento está a consideración de la Cámara. El señor senador Saguier no está presente, y, como miembro de la Comisión, me tomo voluntariamente la tarea de dar a la Cámara algunas referencias generales sobre el despacho de la Comisión.

Se trata de la reforma o, mejor dicho, de la derogación de la ley número 5.291, sobre trabajo de mujeres y menores, sancionada el año 1907, para ser substituída por una legislación más completa que modifica los límites de edad establecidos por aquella ley, y contiene reglas más severas, en defensa o para la protección de las mujeres y de los niños. En el proyecto en revisión se han incorporado las sanciones de la Conferencia Internacional del Trabajo de la Sociedad de las Naciones reunida en Washington en 1919, donde el Gobierno Argentino estuvo oficialmente representado y también la clase obrera y patronal del país.

Recordarán los señores senadores las incidencias ocurridas en 1907, cuando el Congreso discutió la primera ley sobre esta materia, en base de un proyecto presentado por el exdiputado socialista doctor Palacios. Una de las cuestiones discutidas con más apasionamiento fué la relacionada con el alcance nacional de la ley, a la que se pretendía restringir a la Capital y territorios nacionales. En esa oportunidad, el presidente del Departamento Nacional del Trabajo, doctor Matienzo, preparó y

envió un proyecto de ley, ampliamente fundado, conteniendo disposiciones generales, que debían incorporarse al Código Civil, aplicables a toda la República, y disposiciones reglamentarias, aplicables a la Capital y territorios nacionales. Con este criterio fué, por fin, sancionada la ley que hoy lleva el número 5.291, y que ha de quedar derogada totalmente si el Senado acepta el proyecto en la forma en que lo ha sancionado la Cámara de Diputados.

Deseo suministrar a la Cámara en forma sintética una información de las disposiciones fundamentales del proyecto que consideramos.

Por lo pronto, de convertirse en ley, será de aplicación, como ya lo he dicho, en todo el territorio de la República, tanto en las prescripciones generales prohibitivas, como en las reglamentarias, relacionadas con la enunciación de los trabajos prohibidos, total o parcialmente, a mujeres y a menores.

Esta es una característica de considerable importancia, de la ley y una de sus diferencias fundamentales con la vigente, número 5.291.

Con respecto al contenido del proyecto, debo decir que se eleva el límite de edad en forma apreciable sobre el fijado por la ley actual.

El artículo primero prohíbe en todo el territorio ocupar a menores de doce años en cualquier clase de trabajo por cuenta ajena, estando comprendidos en la prohibición expresamente, también los trabajos rurales. El artículo 1º de la ley 5.291 dispone que el trabajo de menores de diez años no puede ser objeto de contrato. La edad se eleva, pues, de diez a doce años y se hace extensiva la prohibición a los trabajos rurales.

El artículo primero, completa también las disposiciones de la ley vigente cuando exige, para que se pueda acordar permisos de trabajo a menores que se encuentran en edad escolar, que llenen satisfactoriamente el mínimo de instrucción escolar que exige la ley.

Se prohíbe ocupar a menores de 14 años en el servicio doméstico, explotaciones o empresas industriales o comerciales, privados o públicos, siendo ésta una disposición nueva, pues la ley 5.291, no tenía ninguna al respecto.

Y el artículo 4º prohíbe a todo varón menor de 14 años o mujer soltera menor de 18 el trabajo por cuenta ajena o propia en calles, plazas o sitios públicos.

Con respecto a la ocupación de mujeres y menores de 18 años, el proyecto extiende, para todo el país algunas prescripciones que son locales en la ley vigente e incorpora otras nuevas; se fija la jornada de trabajo en 8 horas

diarias o 48 semanales, como jornada máxima para las mujeres mayores de 18 años y la de seis horas diarias o 36 horas semanales, la jornada de los menores de 18 años, habiéndose reducido, con esta disposición, la jornada de la ley vigente que era de ocho horas para los menores de diez y seis años.

Con respecto al trabajo nocturno el proyecto ha incorporado el principio general prohibitivo que rige en casi todos los países. En el artículo 6º se dice que no se podrá ocupar a mujeres ni a menores de 18 años en trabajo nocturno y se define como noche el período de tiempo entre las ocho de la noche a las siete de la mañana del día siguiente en invierno y seis de la mañana en verano.

Fija el descanso mínimo de dos horas, prohíbe encargar trabajos a domicilio y ocupar menores o mujeres en tareas peligrosas e insalubres. La prohibición comprende particularmente las industrias enumeradas en el artículo diez, sin perjuicio de que se prohíba el trabajo también en las ocupaciones enumeradas en el artículo once.

Debo hacer notar que el proyecto tiene una disposición de gran trascendencia, contenida en su capítulo tercero sobre protección a la maternidad.

La actual ley del trabajo de las mujeres y de los niños dispone en la parte aplicable a la Capital Federal, que las obreras podrán dejar de concurrir a las fábricas o talleres hasta treinta días subsiguientes al alumbramiento, debiendo reservárseles el empleo. El proyecto que consideramos, ha incorporado la declaración sancionada en el Congreso del Trabajo de Washington y en cierto sentido la ha superado mejorándola, como ha de verse.

En efecto, el artículo 13 dispone como una prohibición terminante ocupar a mujeres durante el período de seis semanas posteriores al parto y consagra la obligación para las mujeres de abandonar el trabajo, previa presentación de un certificado médico, seis semanas antes de la fecha calculada para el alumbramiento.

Esta ausencia, no determinará en ningún caso la pérdida del empleo que deberá ser conservado, como no podrá declarársela cesante si falta, por la misma causa, un tiempo mayor.

La ley dispondrá la habilitación de salas maternales en ciertos establecimientos, de acuerdo con el número de obreros que fije la reglamentación, destinadas a niños menores de dos años y para que queden en custodia en las horas en que la madre trabaja.

Finalmente el proyecto contiene cláusulas relacionadas con la aplicación de la ley y autoridades encargadas de ello y las medidas penales que los señores senadores habrán leído en el capítulo quinto.

Termino, señor presidente, estas referencias generales destinadas a explicar el proyecto en discusión.

Se trata, señor presidente, de un asunto que no necesita ser mayormente fundado, en cuanto a sus principios y objetivos sociales; bien conocida es la legislación de esta materia y está vigente tanto en este país, como en todos los del mundo civilizado. La nueva ley comprenderá a mayor número de mujeres y niños y mejorará considerablemente la protección y reglamentación en vigor.

La sanción de este proyecto, en la forma que lo ha despachado la Cámara de Diputados, significa colocar la legislación argentina a la altura de la legislación de los principales países del mundo, y en concordancia con las convenciones internacionales donde ha estado representada la Nación.

En la discusión en particular del proyecto daré, si los señores senadores lo piden, los informes necesarios, lamentando que el hecho de no haber estado yo encargado por la Comisión de informar a la Cámara este despacho, tenga que limitar mi tarea a estas enunciaciones de carácter general.

—Después de unos momentos de espera, por falta de quórum en el recinto, dice el

**Sr. Cantoni.** — En vista de que hace rato que estamos esperando, pido al señor presidente, invite a los señores senadores que están en antenas, a pasar al recinto.

**Sr. Presidente.** — Se les ha mandado invitar, señor senador.

—Después de otra breve espera, dice el

**Sr. Presidente.** — Se va a votar en general el despacho de la Comisión.

—Se vota y resulta afirmativa.

**Sr. Presidente.** — Está en discusión en particular.

—Se lee el artículo primero.

**Sr. Bravo.** — Pido la palabra.

La Comisión se ha dividido al considerar el alcance de esta ley. La mayoría entiende que

debe aplicarse a la Capital, Territorios nacionales y sitios donde ejerza jurisdicción exclusiva el gobierno de la Nación.

Por mi parte, sostengo el proyecto que viene de la Cámara de Diputados, según el cual tendrá aplicación en todo el territorio de la República.

Quiero hacer notar a los señores senadores la importancia que tiene la sanción que ha de darse en este asunto.

El proyecto contiene en su primer título disposiciones semejantes a las que la ley en vigor aplica en todo el territorio de la Nación. La ley 5.291, como ya lo he dicho, es ley nacional en sus disposiciones fundamentales. De modo que si el Senado llegara a sancionar la derogación de ese principio general, habríamos retrocedido en materia de legislación sobre el trabajo de las mujeres y de los niños y, en lugar de hacer una ley buena para todo el territorio de la República, habríamos derogado las buenas disposiciones generales vigentes para reemplazarlas por disposiciones mejores, es cierto, pero de aplicación local.

En sesiones anteriores, cuando se discutió al proyecto de ley sobre prohibición del trabajo en las panaderías, tuve oportunidad de dar con alguna amplitud las razones que nos llevan a sostener que estas leyes deben ser nacionales, consideradas como atribución del Congreso por la Constitución. Este criterio, también, es aplicable en este caso, con la diferencia del asunto, porque éste tiene mucha más importancia, fuera de toda duda, es mucho más vasto en sus alcances, tiene un valor social y una trascendencia mayor.

No puede discutirse. Se trata de dictar una ley para defender la vida de todos los niños y mujeres que trabajan en el territorio de la Nación.

Solicito, pues, que la Cámara rechace el despacho de la mayoría y vote el artículo tal cual viene propuesto por la Cámara de Diputados, como yo lo sostengo en mi disidencia.

**Sr. Justo.** — No tomé parte en la discusión anterior sobre el carácter local o nacional de las leyes sobre el trabajo, porque se produjo a propósito de una ley que no es de las más fundamentales de este orden; pero en el caso actual, las circunstancias varían en un doble sentido.

La ley que se discute se refiere a partes fundamentales de la población argentina, del punto de vista biológico, a las que más deben merecer nuestra atención: las mujeres y los niños, que sí, en general, en el orden intelec-

tual no pesan tanto, en el orden material, del desarrollo de la raza, son la base misma de la nación.

Y en el proyecto de la mayoría se trata de ir hacia atrás, de retroceder sobre lo ya establecido, sobre lo que ya ha regido en todo el país de largos años a esta parte en esta clase de legislación.

Aplicando un criterio uniforme a todas estas leyes, dos miembros de la Comisión de Legislación, uno de ellos con una convicción muy tibia, según lo ha manifestado personalmente, subscriben ese retroceso en la legislación, que limitaría a la Capital y los territorios la aplicación de la ley reguladora del trabajo de las mujeres y niños; y es indispensable insistir detenidamente sobre la necesidad de mantener la ley en su carácter general, lo que quisiéramos, por supuesto, para todas las leyes del trabajo. En ese sentido yo tengo algunas cosas que decir.

Desde luego, la legislación del trabajo se hace sobre todo para los trabajadores más incapaces de defenderse por sí mismos; se hace en beneficio y protección de los intelectual y corporalmente débiles. Comienza en Inglaterra con la ley protectora de las mujeres y de los niños que trabajaban en las fábricas y que eran sujetos a las peores formas de explotación, siendo los niños quienes más sufrían, expuestos así a degenerar rápidamente desde su infancia, y a formar generaciones enteras de hombres decrepitos prematuramente. Y las mujeres trabajadoras, las madres que llevan en sus entrañas el pueblo de mañana, necesitan también cuidado y atención especial de parte de esta legislación, protectora de los elementos fundamentales de la Nación. Y las mujeres tampoco se han distinguido por su capacidad para defenderse.

Los obreros adultos ingleses pronto comprendieron que esas leyes, que no se referían a ellos, les interesaban, no sólo como hombres, sino también como obreros asalariados, pues toda ley que mejore las condiciones en que se puede hacer trabajar a las mujeres y los niños, redundaba en beneficio de los obreros varones, al establecer regulaciones necesarias que los alcanzan a ellos también, desde el momento en que las mujeres y los niños, trabajadores físicamente inferiores, operan casi siempre como personal auxiliar, y si no pueden trabajar por impedimentos legales, tampoco pueden trabajar los varones en determinadas malas condiciones de horario, o de tiempo. Y este principio de la legislación del

trabajo alcanza con sus beneficios, por esta circunstancia, a los trabajadores asalariados todos.

Los obreros varones y adultos, por su parte, donde son conscientes y organizados, casi no necesitan de legislación del trabajo; por medio de sus sindicatos, ellos imponen condiciones a los patrones y las mantienen, y ésta es tal vez la mejor forma de establecer esas nuevas costumbres sociales, que regulan la ocupación de los obreros.

La jornada de ocho horas, que, como ley es ahora una reivindicación obrera universal, ha sido una costumbre implantada en Australia, a mediados del siglo pasado, por el simple esfuerzo de las organizaciones obreras, y aquí mismo, antes de darse ninguna ley de trabajo, la jornada de ocho horas ha sido prácticamente establecida por la lucha continua de los trabajadores, que consiguieron también establecer, antes de que se diera la ley de accidentes del trabajo, el seguro obligatorio de los obreros, e impusieron a los empresarios en muchas ramas de la producción que aseguraran obligatoriamente a sus empleados contra los accidentes.

¿Dónde, pues, son más necesarias estas leyes, que se quieren restringir en su alcance a la Capital de la República? ¿Dónde hacen más falta estas leyes?

¿Harán más falta en la Capital, donde los trabajadores en su mayoría saben leer, donde viven en condiciones tolerables — y puede creerse que sean tolerables cuando vemos llegar al país masas de inmigrantes que vienen a compartir la vida de los trabajadores argentinos — o harán más falta estas leyes en aquellas partes del país, donde la clase trabajadora es más pobre en todo sentido, más ignorante, más incapaz de asociarse para resistir a la tiranía patronal y más miserable físicamente?

*Me parece que estas leyes hacen mucha más falta fuera de la Capital que en la Capital misma.*

El Honorable Senado pidió a principios de este período legislativo al Poder Ejecutivo, informes sobre el analfabetismo entre los conscriptos de la República; informes que fueron rápidamente proporcionados por el Ministerio de Guerra, aun con ampliaciones no pedidas, y según esos informes, los conscriptos nacidos en el año 1903, la última conscripción registrada, en la primera división del ejército daban 0,44 por ciento de analfabetos; en cambio, los conscriptos de la 4ª división del ejército, daban 30,68 por ciento de analfabetos, y los de la 5ª división, en que están comprendidos los de la provincia de Santiago del Estero, que ha enwia-



do al congreso al señor senador Llanos, campeón del carácter local de estas leyes, la 5ª región, arroja un 34,49 por ciento de analfabetos, entre los jóvenes argentinos de 20 años, aptos para el servicio militar.

¿Cuál será el porcentaje de analfabetos entre los trabajadores de aquella zona del país, jóvenes, adultos y viejos, aptos e inaptos para el servicio militar?

Y este es otro gran aspecto de la cuestión, es decir, la proporción de inútiles para el servicio militar, entre los trabajadores argentinos, según las zonas del país.

No he podido conseguir esos informes del Ministerio de Guerra; no he tenido tiempo de solicitarlos; pero consta en varias publicaciones oficiales, que ciertas provincias del interior presentan un porcentaje enorme de jóvenes de 20 años inaptos para el servicio militar. ¿Será aquella población trabajadora la mejor para sujetarla a las tareas industriales más severas? ¿O habrá que llevarle, desde luego, la protección legal nacional, que la defiende contra los excesos de la explotación?

Por otra parte, al dar leyes sobre esta materia para todo el país argentino, el Honorable Senado no haría para su propio país, para los conciudadanos de los señores senadores, sino lo que hace la influencia de un gobierno extranjero, el gobierno norteamericano, en un país de nuestra lengua y en gran parte de nuestra raza. Y temo que, si se hubiera de aceptar el punto de vista tibio de la mayoría de la Comisión, nuestra esperanza de que alguna vez haya buena legislación sobre el trabajo en todo el territorio argentino, se basara en que lleguemos a estar sujetos a una influencia extranjera, que hiciera para Santiago del Estero, Salta y Catamarca, lo que hace el gobierno de los Estados Unidos para Puerto Rico.

Puerto Rico es un país muy fértil, tropical, densamente poblado por una clase trabajadora, que era sumamente pobre cuando lo conquistaron los Estados Unidos, y que sigue siéndolo todavía, si bien ha mejorado rápidamente su situación intelectual y moral, bajo la influencia que la política norteamericana ha ejercido en la legislación del trabajo y las costumbres de la isla.

A este respecto, quiero llamar la atención del Honorable Senado simplemente sobre los títulos de las leyes que se han dado en Puerto Rico, desde la ocupación americana, sobre las relaciones de patrones y obreros y sobre la situación de los trabajadores.

La primera, que se registra en los Estatu-

tos revisados y códigos, de 1911: Responsabilidad de los patrones por lesiones de los trabajadores en el trabajo; las otras, combinaciones o ligas de obreros; horas de trabajo en las obras públicas, — sobre la cual no hay aquí una ley nacional —; horas de trabajo de los empleados ferroviarios; pago de los salarios en vales y en fichas — medios de que se valen los peores patrones para explotar más a los trabajadores, obligándoles a convertir esas fichas en artículos de consumo en los almacenes establecidos por los mismos patrones —; empleo de los niños; accidentes en los ingenios azucareros; ganancias de los menores; reglas generales para el empleo de trabajadores; tratos de trabajo; exención de los salarios de ejecución; protección de los empleados como ciudadanos — cosa que sería tan importante si la pudiéramos hacer con eficacia en nuestro país; dice: *as voters*, como votantes. Aquí la protección que en este sentido les prestan los patrones consiste en arriarlos, como rebaño electoral, o encerrarlos en corralones, para hacerlos votar. En Puerto Rico, país análogo, la influencia norteamericana ha hecho que se dicte una ley que proteja a los trabajadores portorriqueños contra toda presión electoral de los patrones; empleo de los niños; prohibición para ellos de ciertos empleos; negligencia de los empleados que tienen a su cargo calderas a vapor, — ha de haber también algunas leyes disciplinarias para los trabajadores, lo que no es malo cuando son bien inspiradas; protección del empleado como miembro de organizaciones obreras — ley que prohíbe a los patrones prohibir a los obreros que pertenezcan al sindicato de su gremio, o imponerles salir de éste, como condición para no ser despedidos —; hora de cerrar los establecimientos mercantiles, y trabajo en día domingo; oficina del trabajo; protección de los empleados en las construcciones; empleos de mujeres y niños; empleo de niños; horas de trabajo en las obras públicas — otra ley dada sobre ese aspecto del trabajo, que ocupa dos largas páginas de este libro.

Todo eso se había hecho en Puerto Rico hasta el año 14, y de entonces a la fecha se habrá hecho mucho más, bajo la influencia norteamericana, en materia de legislación del trabajo. Yo comparo esa obra con lo que ha hecho el Congreso Argentino para los trabajadores de todo el territorio de la Nación, y encuentro que estamos en una gran falla de actividad y de eficiencia, y en esta ocasión deploraría que diéramos máquina atrás, deshaciendo la parte más importante de lo poco ya hecho.



Haré otra consideración. Invariabilmente los localistas en materia de legislación del trabajo, proyectan leyes que comienzan así: En la Capital y en los territorios nacionales, etcétera, es decir, en territorios que van desde más allá del trópico hasta cerca del círculo polar, en territorios que envuelven a las provincias todas, y se pretende que fórmulas legales buenas para esta gran ciudad central y para territorios que están en toda la periferia de la República, no servirían para las provincias que separan esta Capital de dichos territorios. Lo que se dicta para la orilla izquierda del Riachuelo, no serviría para su orilla derecha después de pasado el puente; lo que se legisla para el Oeste del Meridiano V, no valdría el Este del Meridiano V, línea ideal que separa zonas idénticas de la Pampa y la provincia de Buenos Aires; leyes que serían buenas para Misiones y el Chaco, no servirían para Corrientes, aunque sirven también para la Capital; leyes que servirían en Formosa, Los Andes y la Capital, no tendrían aplicación en Jujuy, ni en Salta.

Y en general parecería que los localistas en esta materia, consideraran más análogas la constitución social y económica de la Capital de la República y la de los territorios que la de los territorios y las provincias entre sí, lo que es una incongruencia evidente.

Y hay este otro dato de la mayor significación. Aquí estamos discutiendo si estas leyes han de ser nacionales, cuando en el mundo entero se trata de hacerlas internacionales; estamos discutiendo si se ha de aplicar a las provincia de Buenos Aires, una ley que se dicta para la Capital, cuando en toda Europa, en los Estados Unidos y en el Japón, se tiende a que estas leyes se den para el mundo entero, buscándose en su armonía y universalidad que el mundo sea social y económicamente unificado.

Una parte importante del tratado de paz de Versalles está en sus declaraciones sobre el trabajo.

Ese Congreso fué precedido de una conferencia obrera y socialista que se celebró en Berna, en enero y febrero del año 19, conferencia en la que tuve el gusto de conocer, de tratar y de colaborar con el primer ministro de Inglaterra en estos momentos, Ramsay Mc Donald, con el actual ministro del Interior Henderson, con el hoy ministro de las Colonias, el ferroviario Thomas, y varios otros hombres que ocupan hoy las más altas posiciones del mundo político británico, del imperio más grande del mundo. Y ellos estaban allí para dar carácter

internacional a este orden de leyes; para eso habían ido, para tratar la legislación internacional del trabajo. En aquella conferencia se dió, lo que se llamó por los mismos participantes, la carta internacional del trabajo, que comprendía, entre otros puntos, los siguientes: la jornada de ocho horas, el reposo hebdomadario, la instrucción obligatoria y la prohibición del trabajo industrial de los niños, no hasta los 14 años, sino hasta los 15; la limitación especial del trabajo de los adolescentes y las mujeres; el seguro contra los accidentes del trabajo; la libertad gremial; la libertad de emigración de los trabajadores; el salario mínimo legal establecido eventualmente para los ramos de la producción con salarios insuficientes que no puedan mejorarse por la sola acción gremial, sobre todo el salario mínimo para las mujeres y los niños, y el pago de los salarios en moneda sana.

Estas aspiraciones tuvieron el consenso general de las potencias que tomaron parte en el Congreso de Versalles, que se celebró pocas semanas después, casi simultáneamente, con greso que incorporó también, al tratado de paz una carta internacional del trabajo, que comprende la jornada de ocho horas, el reposo hebdomadario, la instrucción obligatoria, la prohibición del trabajo hasta los 14 años de edad, la limitación del trabajo de los adolescentes, el salario suficiente, la libertad gremial, el salario igual sin distinción de sexos para un trabajo igual en cantidad y calidad, la inspección pública del trabajo, para asegurar la aplicación de las leyes y reglamentos relativos a la protección de los trabajadores.

Todo esto lo estableció la conferencia de la paz, reunida en Versalles, para todas las naciones signatarias de aquel tratado y para todas aquellas que quisieran formar parte de la Liga de las Naciones, en la que hay ahora 55 países. Ese mismo tratado establece, como órgano permanente de la Liga de las Naciones, la Oficina Internacional del Trabajo, con sede en Ginebra, dirigida por el exdiputado y exministro francés, Albert Thomas, que posiblemente hará una visita a este país, y que se asombraría de vernos discutir si han de ser para todas las provincias argentinas, leyes que se tratan hoy por los principales gobiernos para el mundo entero. Esta Oficina del Trabajo organiza conferencias internacionales, a una de las cuales se ha referido el senador Bravo, la Conferencia del Trabajo de Wáshington, la de Génova, sobre el trabajo marítimo, y la que se ha celebrado en Ginebra

sobre distintos asuntos, conferencias en la que se ha hecho representar oficialmente el gobierno de la Nación Argentina, no el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ni de los territorios nacionales, sino el de toda la Nación.

Y, en general, ¿cuál es el carácter de las leyes nacionales que rigen en todo el territorio del país? Se sabe, desde luego, que son los tres códigos que señala la Constitución, el Código Civil, el Penal y el de Comercio, que la Constitución declara nacionales, y hoy he visto a un buen número de senadores empeñados en hacer también nacional el Código de Procedimientos Civiles, y algunos señores senadores se interesan para que sea uniforme también el Código de Procedimientos Penales. ¿Podríamos creer que las leyes del trabajo son de un interés inferior a los pequeños asuntos de muchos artículos de esos códigos? ¿Podríamos dudar de que tienen un interés superior y que con mucha más razón deben tener un carácter general?

Las leyes que se refieren al trabajo, tratan de cosas que son iguales en todo el país. Ocho horas de trabajo no me parece que fatiguen menos en Tucumán que en la Patagonia; tal vez fatiguen un poco más. Aquí estaríamos legislando sobre la fatiga para la Patagonia y no para Tucumán. El día tiene 24 horas en todas partes, y generalmente se duerme de noche; hasta los panaderos de Santiago del Estero prefieren seguramente dormir de noche. Los niños, hasta los 14 años, son niños en todo el país, y necesitan la protección de la ley para impedir que se les explote en tareas desproporcionadas a sus fuerzas, y que les impiden también cumplir la obligación de la educación primaria, que impone por ley la Nación.

Parece ser que estas leyes, por su propia naturaleza fueran de las que más exigieran un carácter general. Ya dijo el senador Bravo: «Combatimos en todo el territorio de la República la langosta» y el abrojo grande. ¿No vamos a combatir la explotación de los niños en la misma extensión? Parece que esto fuera tan necesario como aquéllo.

Estas circunstancias creo que determinarán al honorable Senado a no aceptar el tibio despacho de la mayoría de la Comisión, teniendo en cuenta otros hechos más, que son desagradables, frente a la tendencia al localismo en esta materia.

Hay un Código Penal, gran parte del cual es-

tá destinado a amenazar a los trabajadores. Esa amenaza rige en todo el país. «Quien emplea la violencia, o la simple coerción, para obligar a un obrero a plegarse a una huelga — dice el artículo 158 del Código Penal —, está penado con prisión de un mes a un año». Aquí, así como en Jujuy, en Bahía Blanca y en Tierra del Fuego, se aplica ese artículo. Conveniría, entonces, que a la vez existieran en todo el país leyes que, protegiendo a todos los trabajadores argentinos, los predispongan a no incurrir en esa penalidad y eviten la aplicación de ese cruel artículo, porque la huelga es una *ultima ratio*, un recurso supremo a que apela el trabajador, acorralado por la tiranía capitalista.

Otro artículo del mismo código castiga con prisión de cinco a diez años el *incendio o destrucción de una parva*, sea una parva de trigo, como las de la provincia de Buenos Aires; de alfalfa, como en Córdoba y Cuyo, o de lino, como se levantan en Santa Fe; sea un montón de caña de azúcar o de algodón, que se podría incendiar con fines criminales en el Chaco. ¿Por qué esta uniformidad nacional en el castigo para los que prendan fuego a una parva, si no ha de haber una garantía legal, también nacional, para los hombres que hacen parvas en todo el territorio de la República? Conviene, entonces, hacer leyes protectoras para todos los trabajadores del país, en los conflictos que tengan con los que dirigen la producción, que se traduce en la erección de parvas, en la misma forma que existe la otra ley que los amenaza, cuando se ven en un conflicto.

Creo que los señores senadores, que saben hasta qué punto el Estado Argentino penetra en la vida de las Provincias, con sus escuelas primarias, con sus bancos oficiales, con sus obras públicas, con sus leyes de fomento, más o menos felices, han de aceptar de buen grado que ejerza en ellas su alta influencia reguladora de las condiciones del trabajo, mediante leyes nacionales que moderen las relaciones entre patrones y obreros y establezcan las condiciones en que pueden emplearse en la producción, las mujeres y los niños.

**Sr. Caballero.** — Pido la palabra..

Es para decir que con el mayor gusto vamos a votar la ley, tal como fué sancionada por la Cámara de Diputados y con las modificaciones aconsejadas por la minoría de la Comisión del Senado, porque esa ha sido nuestra doctrina, diremos así, en los casos en que leyes de esta naturaleza se han discutido en el Senado y en

el seno de las mismas comisiones, cuando hemos formado parte de ellas.

Nada más, señor presidente.

**Sr. Zabala.** — Pido la palabra.

Yo voté, señor presidente, en general, en contra del proyecto de ley que suprime el trabajo nocturno en las panaderías, no por razones ni por espíritu localista, sino por considerar que no era posible, tratándose de una ley con ese objeto, darle un carácter general, como corresponde que le demos a la actual, por consideraciones de clima, etcétera, porque a los obreros de algunas localidades del país podría serles más cómodo trabajar de noche que de día. Ese ha sido exclusivamente el fundamento de mi voto en esa circunstancia, porque anteriormente, cuando se trató alguna ley de carácter obrero, como la de trabajo a domicilio, sostuve que esa ley debía tener un carácter general, y por esa razón no deseaba aparecer, votando en silencio...

**Sr. Justo.** — ¡Muy bien!

**Sr. Zabala.** — ...pues demostraría ser poco consecuente con el voto anterior.

Explicado así, mi voto en general, en favor del despacho de la minoría, no tengo más que decir.

**Sr. Presidente.** — Se va a votar el despacho de la mayoría de la Comisión.

**Sr. Justo.** — Pedimos votación nominal.

**Sr. Antile.** — Pido la palabra.

Desco fundar brevemente mi voto.

En la discusión que tuvo lugar, por un asunto análogo, hace pocos días, fundé mi voto en el sentido de dar carácter general a estas leyes obreras, porque entiendo que así debe hacerse, puesto que no hay ninguna objeción de orden constitucional que pueda oponerse a ello. El único argumento contra el vigor de estas leyes con carácter general, se hizo por uno de los miembros de la Comisión, el señor senador Llanos, fundado precisamente en observaciones de esta índole.

La Constitución, lo dije y lo repito ahora, no ha establecido cláusula alguna que impida al Congreso el dictar leyes de carácter general, que reglamenten estas relaciones del trabajo humano, sobre todo en estos casos en que bien pueden invocarse razones de orden biológico y hasta de orden social ya expresadas por otros senadores, que, a mi modo de ver determinan, incuestionablemente, que ellas tengan ese carácter general.

Es evidente y no escapará a la observación de cualquier hombre que se interese por estos asuntos, que lo que puede sancionarse para el

Chaco, puede sancionarse, también, para Santa Fe, por ejemplo, que está colindando con esa región por el Norte, que tiene los mismos productos forestales que industrializar, la misma forma de trabajo humano y que debe estar, por lo tanto, sometida también, a una misma legislación en tal sentido.

Por razones, pues, de igualdad, de justicia y hasta por motivos de humanidad, dejo expresado el fundamento de mi voto en el sentido de la aprobación del artículo primero que establece la minoría de la Comisión.

Nada más.

**Sr. Presidente.** — Se va a votar.

**Sr. Bravo.** — Si resultara negativa en el despacho de la mayoría, entonces se pondría en consideración el de la Cámara de Diputados.

**Sr. Presidente.** — Se va a proceder a la votación nominal del despacho de la mayoría de la Comisión.

— Votan por la negativa, los señores senadores: Zabala, Aybar Augier, Caballero, del Valle, Luna, Antille, Céspedes, Vidal, Rodríguez Súa, Mora Olmedo, Soria, Gómez, Bravo, Justo, Gallo y Larlés.

**Sr. Secretario** (Labougle). — Ha sido desechado por unanimidad de votos.

**Sr. Justo.** — Ahora se podría votar por signos.

**Sr. Presidente.** — Se va a votar el despacho de la Cámara de Diputados.

— Se vota y resulta afirmativa por unanimidad.

— Se lee el artículo 2º.

**Sr. Bravo.** — Hago indicación para que artículo que no sea observado se dé por aprobado.

— Asentimiento.

**Sr. Presidente.** — Habiendo asentimiento, así se hará.

— Se leen y aprueban sin observación los artículos 2º, 3º, 4º y 5º.

— Se lee el artículo sexto.

**Sr. Melo.** — ¿En los espectáculos públicos se comprende a los cinematógrafos?

**Sr. Bravo.** — Se refiere a trabajar, y no concurrir a los cinematógrafos.

**Sr. Melo.** — Hago la pregunta por esta cir-

cunstancia: para arreglar y pasar las vistas momentos antes de exhibirlas es necesario revisarlas y esa revisión la hacen mujeres.

**Sr. Bravo.** — No serían espectáculos públicos sino trabajo de preparación de espectáculos.

**Sr. Melo.** — No se refiere propiamente a la preparación, sino al orden y arreglo de las cintas para ver si están en buen estado o no, antes de pasarlas en público.

**Sr. Justo.** — ¿Es un trabajo de fábrica?

**Sr. Melo.** — No es trabajo de fábrica.

**Sr. Justo.** — ¿Están incluídos los niños?

**Sr. Melo.** — Es un trabajo que lo hacen las mujeres; es una tarea análoga a la de las coristas. ¿Está prohibido el trabajo para ellas o se comprende entre los espectáculos?

**Sr. Bravo.** — Si son personas accesoriamen- te empleadas entiendo que deben estar comprendidas en la disposición del artículo; no, si se trata de un trabajo ajeno a la representación, como es la elaboración o preparación de cintas.

**Sr. Melo.** — Es un accesorio de la exhibición y completamente preparatorio.

**Sr. Céspedes.** — ¿Se prohíbe el trabajo de las menores de 14 años? Por que hay muchas menores de 14 años que trabajan por necesidad, como las dactilógrafas, por ejemplo.

**Sr. Justo.** — Las menores de 14 años tienen que ir a la escuela. Se prohíbe ahora el trabajo hasta los 16 años, señor senador, y debe ser muy raro el caso de una dactilógrafa menor de 16 años, que por lo pronto tiene que tener una educación gramatical suficiente. Debe ser un caso tan raro el que refiere el señor senador que no merecería hacerse una excepción por ello en la ley.

—Se vota y aprueba el artículo 6º.

—Se lee el artículo 7º.

**Sr. Céspedes.** — Yo hago indicación para que se incluyan las dactilógrafas.

**Sr. Bravo.** — La ley está articulada con un concepto general prohibitivo para los niños en edad escolar y después restringe y reglamenta el trabajo para las mujeres y menores de 18 años.

El caso a que se refiere el señor senador está comprendido en las disposiciones del artículo primero, cuando dice: «El ministerio de menores respectivo podrá autorizar el trabajo de éstos, cuanto lo considere indispensable para la subsistencia de los mismos, o de sus padres o hermanos, siempre que se llene

en forma satisfactoria el mínimo de instrucción escolar exigido por la ley». Trabajo prohibido por las disposiciones del artículo 1º, que dice: «Queda prohibido en todo el territorio de la República, ocupar a menores de 12 años de edad en cualquier clase de trabajo por cuenta ajena, incluso los trabajos rurales». Esa es una disposición general establecida por el artículo.

**Sr. Céspedes.** — Yo digo cuando se trata de trabajos por cuenta propia.

**Sr. Justo.** — Por cuenta propia puede escribir a máquina, nada se lo prohíbe, si tiene máquina.

**Sr. Antille.** — Yo creo que en el artículo 2º está comprendida la observación hecha por el señor senador, pues dice allí que «ningún menor de 14 años podrá ser ocupado en caso alguno en el servicio doméstico ni en explotaciones o empresas industriales o comerciales, sean privadas o públicas...» Entonces están comprendidas las dactilógrafas menores de 14 años, que trabajan en esas condiciones.

**Sr. Bravo.** — El señor senador se refiere a una niña menor de 14 años que tiene máquina y trabaja en su casa, por cuenta ajena.

**Sr. Céspedes.** — Porque no tiene otros medios de vida.

**Sr. Antille.** — Pero trabaja para otros.

**Sr. Bravo.** — Entonces trabaja por cuenta ajena.

**Sr. Antille.** — Por ello está comprendida en las disposiciones.

**Sr. Bravo.** — Por otra parte, hay una delegación comprendida en el artículo primero, cuando da al ministerio de menores el poder de autorizar el trabajo en las condiciones previstas por el mismo artículo. Creo que es el caso a que se refiere el señor senador.

—Se aprueba el artículo 7º y el 8º, sin observación.

—Se lee el artículo 9º.

**Sr. Aybar Augier.** — Desearía que se me aclarara el alcance de este artículo.

**Sr. Bravo.** — Los artículos 10 y 11 contienen una especificación de las prohibiciones para casos particulares, y se faculta, por la 2ª parte del artículo 9º, al Poder Ejecutivo, a reglamentar la ley y en los casos en que puedan presentarse otras industrias o actividades peligrosas, que no estén comprendidas en la reglamentación, para incluirlas en ella.

**Sr. Aybar Augier.** — Muy bien.

—Se aprueban los artículos 9, 10, 11 y 12.

—Se lee el artículo 13.

**Sr. Melo.** — ¿Si me permite el señor miembro informante? ¿Cómo ha de saber el empleador, en los casos en que se presente una mujer, que se encuentra durante el período de 6 semanas posteriores al parto, como dice el apartado 1º del artículo 13?; porque efectuado el parto, es muy difícil saber que haya estado embarazada la que solicita trabajo.

**Sr. Bravo.** — Son los certificados médicos los que comprobarán eso.

**Sr. Melo.** — Quiere decir que no se le daría trabajo sin el certificado médico.

**Sr. Justo.** — En ese caso es evidente que el patrón no incurriría en ninguna responsabilidad. Pero esto se refiere a las empleadas que van a volver a trabajar en la misma fábrica, a las que quedan con el mismo patrón.

**Sr. Bravo.** — La ley considera una situación permanente: 6 semanas antes del parto y 6 semanas con posterioridad, para una empleada que va a continuar trabajando en la misma fábrica.

**Sr. Melo.** — Estoy perfectamente de acuerdo con la ley.

—Se aprueban los artículos 13, 14, 15, 16 y 17.

—Se lee el artículo 18 y dice el

**Sr. Secretario (Labougle).** — Este artículo ha sido modificado por la Comisión.

**Sr. Bravo.** — Pido la palabra.

La modificación introducida por la mayoría de la Comisión consiste en substituir las palabras «bajo pena de daños y perjuicios». La Comisión entendió que esta acción de daños y perjuicios a cargo de los obreros era uno de los tantos derechos vagos y de ejecución imposible y se la había substituído por una disposición categórica diciéndose: «bajo pena de multa de 20 a 200 pesos que se entregarán al damnificado».

Pero en la forma en que el Senado acepta el proyecto y dado el poco tiempo que hay para comunicarla a la Cámara de Diputados, y para que ésta considere la enmienda, yo me permitiría pedir a los señores senadores que no aceptaran esta modificación y que votaran el proyecto como ha venido de la otra Cámara. Como lo he dicho, la Comisión introdujo esta modificación creyendo que se dispondría de tiempo para que la Cámara de Diputados la pudiera considerar. Pediría que se acepte la sanción de la Cámara de Diputados, pero que no se modifique a que las

**Sr. Presidente.** — Se va a votar el despacho de la Comisión.

—Se vota y resulta negativa.

**Sr. Justo.** — Hay que votar ahora el proyecto de la Cámara de Diputados.

**Sr. Presidente.** — Se va a votar el artículo tal como figura en el proyecto de la Cámara de Diputados.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se lee el artículo 19.

**Sr. Secretario (Labougle).** — Este artículo ha sido también, modificado por la Comisión.

**Sr. Bravo.** — Pido la palabra.

Por las mismas razones que he aducido anteriormente, pido que se apruebe el artículo en la forma como ha venido de la Cámara de Diputados.

**Sr. Secretario (Labougle).** — Quedando subsistente «en las provincias».

**Sr. Melo.** — Pido que se deje constancia de mi voto en contra por considerarlo inconstitucional, porque el Congreso legisla sobre locales que están fuera de la jurisdicción nacional.

**Sr. Presidente.** — Se va a votar el despacho de la Comisión.

—Se vota y resulta negativa.

**Sr. Presidente.** — Se va a votar el artículo en la forma que ha sido sancionado por la Cámara de Diputados.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se lee y aprueba el artículo 20.

—Se lee el artículo 21.

**Sr. Secretario (Labougle).** — Este artículo también fué modificado por la Comisión.

**Sr. Bravo.** — La Comisión introdujo un agregado a este artículo referente al destino de las multas, para los casos previstos en el artículo 13 y 14, y destinándolas al Consejo Nacional de Educación. Por las mismas razones que he dado al disentirse el artículo 18, voy a pedir que se vote en contra del despacho de la Comisión y se acepte la sanción de la Cámara de Diputados, para que así quede convertido en ley este proyecto sin mayores demoras.

**Sr. Melo.** — Si las infracciones se refieren a menores, quedaría sin sanción, porque en la última parte del artículo se mandan entregar las multas a la mujer perjudicada.

¿De manera que si no es mujer, no hay multa?

**Sr. Bravo.** — En los casos particulares, sí, porque se refieren a los artículos 13 y 14, que tratan de la protección de la maternidad. La Comisión había transformado el destino de la multa, pasándola al Consejo Nacional de Educación.

**Sr. Presidente.** — Se va a votar...

**Sr. Aybar Augier.** — ¿Quiere aclararme el señor senador por la Capital si las infracciones se refieren a los patrones o a los menores?

**Sr. Bravo.** — Esa parte se refiere a todas las infracciones. Ahora, la segunda parte del artículo se refiere a las infracciones relacionadas con los artículos 13 y 14, de protección de la maternidad. Por eso, esta parte del artículo habla de entregar el producto de la multa a la mujer perjudicada.

**Sr. Aybar Augier.** — ¿No se refiere a los menores?

**Sr. Bravo.** — El artículo tiene dos disposiciones: una de carácter general, contenida en el primer párrafo, que dice: «Las infracciones a la presente ley serán penadas con multa de 50 a 1.000 pesos moneda nacional que se doblará en caso de reincidencia o, en su defecto, prisión equivalente, de acuerdo con el Código Penal».

La segunda parte se refiere a la violación de los artículos 13 y 14, y establece que el producto de la multa se entregará a la mujer perjudicada en los casos de infracción al capítulo tercero.

**Sr. Aybar Augier.** — ¿En la primera parte del artículo están comprendidos los menores?

**Sr. Bravo.** — Sí, señor senador, y en la segunda parte las mujeres.

**Sr. Aybar Augier.** — Entonces voy a votar en contra del despacho, concorde en esto con el criterio del señor senador por Entre Ríos. Entiendo que por el hecho de ser menores, no pueden ser penados.

**Sr. Bravo.** — No creo que los menores vayan a incurrir en una multa de 1.000 pesos. Un chico de trece años...

**Sr. Aybar Augier.** — Puede hacerlo por descuido.

**Sr. Bravo.** — La responsabilidad es para los patrones.

**Sr. Aybar Augier.** — ¿Y si no tiene?

**Sr. Bravo.** — En todo caso, el patrón tiene obligación de asegurarse las condiciones de edad...

**Sr. Aybar Augier.** — ¿Y si el patrón tiene interés especial en que el menor incurra en esa infracción?

**Sr. Bravo.** — Será castigado. Además, dentro de lo imaginativo, se puede llegar a casos imposibles. Los patrones tienen la obligación de averiguar si las personas que toman a su servicio llenan todas las condiciones de la ley.

**Sr. Aybar Augier.** — ¿Entonces la disposición no comprende a los menores?

**Sr. Bravo.** — Sostengo que no señor senador. La infracción se comete cuando se ocupa un menor ilegalmente.

**Sr. Aybar Augier.** — Esa es la aclaración que solicitaba.

**Sr. Presidente.** — Se va a votar el despacho de la Comisión.

—Se vota y resulta negativa.

**Sr. Presidente.** — Se va a votar el despacho de la Cámara de Diputados.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se lee el artículo 22.

**Sr. Melo.** — Desearía saber si están comprendidos en los ejercicios peligrosos de fuerza, los asaltos de boxeo.

**Sr. Justo.** — Eso lo resolverá el juez del crimen.

**Sr. Melo.** — Nosotros estamos legislando y debemos establecerlo, del punto de vista de los que especulan con ello.

**Sr. Bravo.** — Si yo tuviera que aplicar esta disposición penal, los incluiría, pero son disposiciones cuya aplicación quedará a cargo de los jueces, los que decidirán si un asalto está prohibido.

**Sr. Aybar Augier.** — Yo creo que eso sería invadir jurisdicciones extrañas, porque el asunto que ha recordado el señor senador por Entre Ríos corresponde a las ordenanzas municipales, no habiendo una ley especial; me refiero al boxeo.

**Sr. Justo.** — El boxeo no es un trabajo.

**Sr. Melo.** — Es uno de los ejercicios peligrosos. El señor senador por Tucumán recordará, que de acuerdo con la Constitución, es el Congreso quien ejerce jurisdicción exclusiva sobre la Capital Federal, y que la legislación del Congreso prima sobre las ordenanzas mu-

nicipales, las que sólo pueden comprender aquella materia que el Congreso ha delegado a la Municipalidad. De manera, que cuando dictamos una ley, es conveniente que establezcamos en forma precisa su alcance.

**Sr. Bravo.** — Pido la palabra.

El artículo 9º que ha sancionado la Cámara, prohíbe la ocupación de mujeres y niños en tareas peligrosas o insalubres, y dispone que la reglamentación del Poder Ejecutivo determinará las industrias que tienen ese carácter.

De manera que el Poder Ejecutivo está facultado para reglamentar la ley, y prever cuáles son las tareas peligrosas, y si el Poder Ejecutivo entiende que el ejercicio del box es una tarea peligrosa para las mujeres y los niños, según la forma en que se practique, también la considerará incluida.

**Sr. Aybar Augier.** — Pido la palabra.

Estoy muy de acuerdo con las ideas que ha enunciado el señor senador por Entre Ríos, en cuanto a los excesos de ese ejercicio, y con la incursión de orden constitucional que nos ha hecho. Pero yo quería referirme a la situación actual: no hay ninguna ley que reglamente el boxeo, y no habiéndola, no creo que debamos contemplar la situación que plantea el señor senador por Entre Ríos.

En realidad, puede ser un ejercicio peligroso, y muchos hechos recientes nos han demostrado que efectivamente implica un serio peligro para la vida de los hombres; pero sostengo que eso debe ser materia de una ley especial, y nunca ser incluido en una ley de carácter general reglamentaria del trabajo.

Además, el hecho de entrar a definir, si es o no tarea peligrosa el boxeo, nos obligaría a hacer un debate accidentado y largo que nos quitaría un tiempo precioso que necesitamos dedicar a otros y más altos intereses públicos.

Quiero dejar fijada mi opinión en este sentido, sobre la cuestión que se ha promovido, porque entiendo que el boxeo no puede ser incluido en las disposiciones que se están discutiendo.

**Sr. Antille.** — Pido la palabra.

La ley tiende a reglamentar el trabajo y ocupación de las mujeres y niños, y no se le puede facultad al Poder Ejecutivo, incidentalmente, para que determine, dentro de la autorización que se le da para definir lo que es un tarea peligrosa, a que reglamente este clase de ejercicios.

Al referirse la ley al trabajo de mujeres y niños, y prohibir los de fuerza que resulten peligrosos, es natural que se refiere a los ejercicios que resultan de un trabajo a que las

mujeres y niños se dediquen con fuerza excesiva o con peligro de dislocación. Los acróbatas, por ejemplo, estarían comprendidos en la parte final del apartado, desde que se dedican a un trabajo en esa forma. Pero el ejercicio del boxeo puede ser prohibido aunque no sea peligroso, por otras razones y aspectos de carácter social, quizás por una ordenanza municipal, la que sí podría prohibir un espectáculo público de boxeo. Sin embargo, no podría prohibirse que los niños se ejerciten en tareas higiénicas y aptas para la salud y para la vida. Es claro también, que si al aprovechar de la fuerza de un niño, se le hace realizar una labor que pone en peligro su salud y su vida, puede prohibirse por esta ley, siempre que ella se relacione con un trabajo remunerativo para el patrón.

Este es el concepto y el alcance que yo doy a la disposición que se discute y en ese sentido entiendo que debe ser votado, tal como viene de la Cámara de Diputados.

**Sr. Melo.** — Pido la palabra.

Esta es una ley de protección a las mujeres y a los menores. He hecho esa observación colocándome dentro de ese propósito de protección. Es notorio que hay empresas que realizan exhibiciones de boxeo por precio; y entonces, participando del criterio del señor senador por la Capital doctor Bravo, entiendo que debe prohibirse la realización de esas escenas y que debe prohibirse el tráfico que hacen esos empresarios que se relaciona con el ejercicio de boxeo, que evidentemente es peligroso: la crónica de los diarios ha dado noticias o informaciones de casos en que ha habido hasta muertos.

Ese es el alcance de mi observación y, por otra parte, entiendo que es el Congreso, por medio de una ley, no el Poder Ejecutivo, a quien le incumbe establecer la infracción y la sanción, dado que al Poder Ejecutivo, por la Constitución, le está velado llenar funciones judiciales y también funciones legislativas.

**Sr. Antille.** — Debo recordar al señor senador por Entre Ríos que, en la ciudad de Paraná, capital de ese Estado, murió, con motivo de un asalto de boxeo, uno de los adversarios; el juez del crimen intervino en el proceso y condenó al matador por homicidio por imprudencia.

**Sr. Melo.** — Ese es otro aspecto de la cuestión, señor senador. No me he referido a ese aspecto, porque es sabido que el caso de homicidio, por culpa o imprudencia, está comprendido dentro de esa situación. Pero me he



referido a los que trafican con esos espectáculos de exhibición, no a los actores mismos.

**Sr. Antille.** — Quería decir que hay ley que castiga esos actos.

**Sr. Aybar Augier.** — Yo insisto en que realmente estamos avanzando demasiado en esta legislación. El señor senador por Santa Fe sostiene el verdadero espíritu de esta ley, que es el de reglamentar el trabajo de las mujeres y el de los niños. Yo a mi vez hago notar que, de ningún modo, puede incluirse el boxeo, por cuanto puede ser eso un simple ejercicio o un *sport*. Si vamos a seguir el criterio de los señores senadores por Entre Ríos y por la Capital, llegaríamos también a comprender los ejercicios acrobáticos que se realizan en los teatros y en los circos, porque todos saben que hay también evidente peligro para la salud y para la vida de los que lo practican. De tal modo...

**Sr. Melo.** — Están comprendidos, señor senador, los ejercicios acrobáticos.

**Sr. Aybar Augier.** — ¿Están comprendidos? Discúlpennme los señores senadores, no me había percibido de ello.

Tendríamos entonces que dar mucha extensión a esta ley, porque comprenderíamos también ejercicios de muchas clases, como por ejemplo, las bailarinas (*risas*) y todas esas novedades que nos están llegando de Europa, y que tanto solicitan la atención de los hombres de mundo. Debemos limitarnos a votar la ley reglamentaria del trabajo de las mujeres y de los niños, sin complicarla.

Ahora, en cuanto al boxeo, estoy de acuerdo con los señores senadores que han manifestado que se trafica con ese ejercicio, que evidentemente hay una especulación de lucro; que hay empresas especiales que se ocupan de explotar la fuerza y la musculatura de los hombres para enriquecerse, pero entiendo que eso debe ser materia de una ley también especial, que ha de requerir la serena atención del Congreso en su hora, y no improvisar en la forma que lo estamos haciendo, con la seguridad de que no vamos a llegar a ver realizado el propósito que inspiran las palabras de los señores senadores por Entre Ríos y por la Capital.

De manera, señor presidente, que dejo una vez más expresada mi opinión en este asunto.

**Sr. Bravo.** — Pido la palabra.

No quisiera que este artículo no contara con el voto de los señores senadores, por una interpretación que se fundara en un equívoco.

El artículo prohíbe y aplica penalidades a todo aquel que haga ejecutar con mujeres y niños menores de 18 años, ejercicios peligrosos

de fuerza y de dislocación. ¿Corresponde al Senado en este momento entrar a considerar si los ejercicios de boxeo, en tales o cuales condiciones, por cuenta ajena, por desafío o en la forma que esa lucha se practica, están comprendidos entre los ejercicios peligrosos de fuerza? Yo creo que no corresponde; que será el Poder Ejecutivo quien haga la reglamentación de la ley, cuando esos ejercicios lleguen a asumir un carácter peligroso, quien prohibirá que lo practiquen mujeres y menores de 18 años.

Para el campo de deportes de boxeo, con todos los peligros que ofrece y para que se reproduzcan las escenas a que aludía el señor senador por Santa Fe, con las consecuencias desagradables de los últimos episodios del Paraná, quedan todas las personas mayores de 18 años. La ley lleva su protección a las mujeres y a los menores de 18 años. Todos los que quieran matarse boxeando lo pueden hacer y esta ley no lo va a impedir, si no son mujeres ni menores de 18 años.

**Sr. Presidente.** — Se va a votar el despacho de la comisión.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se aprueba sin observación el artículo 23.

—Se lee el artículo 24.

**Sr. Secretario (Labougle).** — La Comisión aconseja la supresión de este artículo.

**Sr. Bravo.** — Sí, porque coincidía con el despacho dado respecto del artículo primero.

Corresponde que se vote el artículo que ha sido sancionado por la Cámara de Diputados.

**Sr. Presidente.** — Se va a votar el despacho de la Comisión.

**Sr. Bravo.** — El proyecto venido de la Cámara de Diputados. Es el artículo 24, que la Comisión propuso suprimirlo, porque según ella debía aplicarse solamente a la Capital y territorios nacionales. Pero con la sanción dada por el Senado al artículo primero, el despacho queda sin efecto y debe votarse el proyecto de la Cámara de Diputados.

**Sr. Zabala.** — ¿Y en qué forma se va a incluir en el Código Penal?

**Sr. Bravo.** — En este momento no se podría hacer el desmenuzamiento de las disposiciones para saber en qué parte van a ir.

**Sr. Zabala.** — Ese trabajo de incorporación al Código Penal, debe hacerlo el Congreso.

**Sr. Bravo.** — El señor senador sabe que cuan-

Septiembre 30 de 1924

do se sancionan leyes generales con disposiciones complejas, como las que contiene esta ley y dispone que se incorporen a la legislación civil o penal, se entiende que ha de ser cuando se haga nueva edición de los códigos.

**Sr. Antille.** — Pido la palabra

A mí me parece que la mente del artículo no es incorporar la disposición al cuerpo del Código Civil o Penal, sino que es declarar que estas sanciones tendrán el mismo alcance que tiene el Código Civil para las relaciones comunes, y el Código Penal para todas las infracciones delictuosas. Me parece que ese es el espíritu verdadero. La ley no puede descomponerse tomando una parte de ella para el Código Penal y otra parte para el Código Civil, sino que los jueces, en la aplicación de la misma, tendrán presente sus artículos que, como ella lo determina, son parte del Código Civil, o del Penal. Se trata de arrancarlos del fuero federal, para hacerlas de materia ordinaria, común.

**Sr. Bravo.** — Pero el señor senador por Jujuj pregunta cómo se debe incorporar al Código Civil.

**Sr. Antille.** — La incorporación está hecha.

**Sr. Zabala.** — La incorporación la debió hacer el Congreso, diciéndose: incorpórese al Código Civil, etcétera.

**Sr. Bravo.** — Esta ley no tiene por objeto modificar el Código Civil, sino incorporar disposiciones nuevas, cuya colocación dependerá de las disposiciones mismas.

**Sr. Patrón Costas.** — Si se manda incorporar disposiciones, habrá que hacer la incorporación en alguna de sus secciones o capítulos; no es posible hacerlas dividiendo la ley.

**Sr. Bravo.** — En los Estados Unidos, los estatutos están formados por todas las leyes dictadas durante los distintos períodos legislativos, y se van incorporando a él las leyes nuevas. En esa misma forma se han de incorporar aquí, la ley de occidente del trabajo, la reforma de la locación, la ley agraria, la de tutela de menores, la ley del trabajo de las mujeres y los niños, en una cantidad de disposiciones y aspectos que forman una legislación nueva.

**Sr. Presidente.** — Se va a votar el artículo sancionado por la Honorable Cámara de Diputados.

**Sr. Aybar Augier.** — ¿El que manda incorporar? Yo voto en contra.

—Se vota y resulta afirmativa.

**Sr. Melo.** — Pido que se deje constancia de mi voto en contra.

**Sr. Presidente.** — Se va a rectificar la votación.

—Rectificada, dice el

**Sr. Secretario (Labougle).** — Afirmativa de 10 votos; votan 17 señores senadores.

—Se vota y aprueba el artículo 25.

**Sr. Secretario (Labougle).** — Está aprobada la ley.

16

## INCIDENCIA

**Sr. Céspedes.** — Corresponde tratar ahora, señor presidente, la ley de alquileres.

**Sr. Zabala.** — Lo que corresponde es que extremos a tratar los despachos sobre pensiones; hay una resolución anterior tomada por el honorable Senado.

**Sr. Justo.** — Lo resuelto por el honorable Senado, es que se traten ahora los despachos de la Comisión de Legislación, relativos al cierre de las casas de comercio, y al veto del Poder Ejecutivo, de la ley sobre el pago de los salarios.

**Sr. del Valle.** — No ha habido despacho sobre ese último.

**Sr. Aybar Augier.** — Ahora corresponde tratar la ley de alquileres.

**Sr. Zabala.** — Ha llegado con posterioridad a la resolución tomada por el honorable Senado.

**Sr. Patrón Costas.** — Corresponde tratar ahora, el cierre de las casas de comercio.

**Varios señores senadores.** — Y después la ley sobre alquileres.

**Sr. Zabala.** — Se ha fijado que se traten los despachos relativos a pensiones.

**Sr. Bravo.** — Para tratar las pensiones se había designado la sesión del viernes pasado: era una preferencia de día. Ahora corresponde tratar el despacho sobre cierre de los comercios a las ocho de la noche que figura en la orden del día número 12.

17

## PROYECTO DE LEY, SOBRE CIERRE DE LAS CASAS DE COMERCIO A LAS VEINTE

—Se lee:

Honorable Senado:

La Comisión de Legislación ha estudiado el proyecto de ley venido en revisión, sobre cierre de las casas de